

San Salvador, 11 de abril de 2018.

Señores Instituto de Acceso a la Información Pública.

Presente.

Yo, Eva Marcela Escobar Pérez, de generales conocidas en el expediente de apelación mencionado, y en atención a que el día 6 de abril de 2018 se recibió en la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial (UAIPOJ), vía correo electrónico, notificación de la resolución emitida por ese Instituto de fecha 3 de abril del corriente año, en la cual resuelven: "... a) Prevenir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que a través de su Oficial de Información, en un plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia emitida por la Corte en Pleno.

b) Prevenir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que a través de su Oficial de Información, en un plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, se manifieste sobre el plan de plazos para practicar las auditorías a las declaraciones patrimoniales del juez Roberto Carlos Calderón Escobar, requerido a la Sección de Probidad..."(resaltados omitidos).

A ese respecto, y dentro de plazo legal aludido, expongo lo siguiente:

I. 1. En relación con la primera prevención, estimo pertinente hacer de su conocimiento, en atención a que se ha indicado en la referida decisión que "... no se adjuntó el Acta en la cual se hacía constar lo acordado por el Pleno y solamente se citó decisión tanto en la resolución emitida por la Oficial de Información como en el documento presentado, no queda claro sobre cuáles declaraciones fue que la Corte en Pleno tomó dicha decisión, ya que del texto que coloca la Oficial no se puede determinar con exactitud cuáles fueron los documentos que se declararon inexistentes..."

Sobre tal punto, mediante este escrito presento el acta de la sesión de Corte Plena celebrada el día 30 de enero de 2018, la cual se encuentra publicada en el Portal de Transparencia y en el Portal Institucional de este Órgano de Estado, por ser información

oficiosa de conformidad con el art. 13 letra e de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); asimismo, se agrega para análisis del Instituto certificación del acuerdo emitido sobre este punto específico.

Al respecto, considero pertinente hacer del conocimiento del IAIP que las actas de sesión de Corte Plena –como cualquier otro órgano decisor– únicamente se consigna un resumen de lo expuesto en la reunión; de ahí que, no se consigna literalmente todas las consideraciones vertidas por cada uno de los intervinientes.

En ese sentido, se advierte que en la sesión de Corte Plena de fecha 30 de enero de 2018, se hizo del conocimiento al Tribunal sobre la decisión emitida por ese Instituto el día 15 de enero de 2018, mediante la cual se emitió resolución definitiva en el expediente de apelación que nos ocupa.

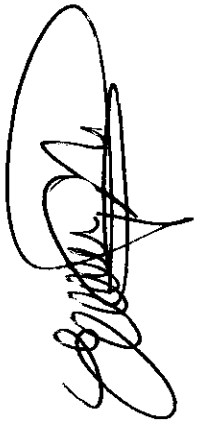
Lo anterior lo compruebo con el memorándum con referencia UAIP/1977/127/2018(2), de fecha 26 de enero de 2018, en el cual se solicitó a la Secretaría General de esta Corte que se hiciera del conocimiento de Corte Plena la resolución definitiva del IAIP, situación que implica –en la práctica– que se incorpore ese punto de forma urgente en la siguiente sesión a efectos que la Oficial de Información exponga el caso ante el Pleno.

En ese sentido, en la sesión de Corte Plena del 30 de enero de 2018, la suscrita expuso al Pleno el contexto del caso completo, señalando que el Sub Jefe de la Sección de Probidad, por medio del memorándum con referencia 349-201-SP, de fecha 1 de noviembre de 2016, remitió las declaraciones patrimoniales respecto de las cuales se tenía registro en esa Sección, siendo estas las siguientes: declaración jurada de toma de posesión como Juez Décimo Segundo de Paz Propietario de San Salvador, de fecha 01/06/2003 y la de cese de funciones de ese mismo cargo de fecha 31/01/2012; así como la de toma de posesión en el cargo de Juez Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, de fecha 01/02/2012. Asimismo, se informó al Pleno que el mencionado Sub Jefe de la Sección de Probidad expresó que de **“... las restantes declaraciones juradas de patrimonio requeridas, no aparecen no aparecen en los archivos que lleva esta Sección, que las haya presentado...”**.

Esos datos motivaron a que Corte Plena resolviera que se declarara la “... inexistencia de la información que la Sección de Probidad reportó [en el memorándum aludido], en vista que no tienen registros de la declaración presentada por el juez Roberto Carlos Calderón Escobar...”, situación que se canalizó a través de la Oficial de Información Interina de este

Órgano de Estado, pues de conformidad con el art. 73 de la LAIP es una atribución del Oficial de Información emitir las declaratorias de inexistencia; por tanto, la Corte Suprema de Justicia en Pleno únicamente indicó que se procediera de esa forma y ha sido, a través de la resolución de fecha 2 de enero de 2018 (siendo lo correcto 2 de febrero de 2018), emitida por la UAIPOJ, en la cual se materializa dicha orden de Corte Plena y se detalla con precisión cuáles declaraciones juradas de patrimonio son inexistentes, las cuales son coincidentes con las aquellas respecto de las cuales la Sección de Probidad informó que no se tenían registros de haberse presentado.

Por tanto, se reitera, no existe incongruencia entre la declaratoria de inexistencia emitida por la UAIPOJ con lo informado por el Sub Jefe de la Sección de Probidad o lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, pues todo se ha basado en el primer informe remitido por la Sección de Probidad, mediante el memorándum de fecha 1 de noviembre de 2016, con referencia 349-2016-SP, el cual se encuentra incorporado al folio 5 del expediente en poder de ese Instituto.



II. 1. Respecto al segundo aspecto prevenido adjunto certificación del memorándum con referencia 108-2018-SP, de fecha 11 de abril de 2018, suscrito por el Sub Jefe de la Sección de Probidad, mediante el cual informa lo relativo al Plan de Trabajo para practicar las auditorías a las declaraciones juradas de patrimonio presentada por el juez Roberto Carlos Calderón Escobar, en donde se exponen las razones de esa Dependencia respecto de este requerimiento.

2. En este punto, es preciso acotar que en este acto también se incorpora materialmente, la certificación del acuerdo No. 6-P, emitido por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, de fecha 11 de octubre de 2011, mediante el cual se acuerda "... REQUERIR, por medio de la Sección de Probidad, a los Magistrados de Segunda Instancia, Jueces, Secretarios Judicial y Oficial Mayores, la presentación de su declaración patrimonial, conforme a la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos..."; en otras palabras, a partir de esa fecha es que existe una obligación para los mencionados funcionarios judiciales de presentar las declaraciones juradas de patrimonio.

Lo anterior se aclara por cuanto antes de esa época -11 de octubre de 2011- no existía ninguna disposición legal o acuerdo de Corte Plena que obligara a los jueces a presentar las declaraciones juradas de patrimonio y, consecuentemente; tampoco existía una obligación para

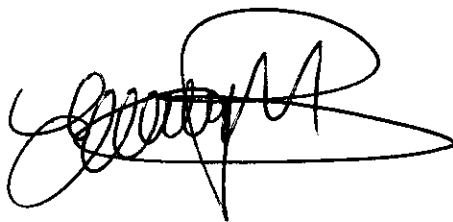
realizar las respectivas auditorías, entre estas, las que solicitó el peticionario desde el año 2003.

Lo anterior es preciso hacer de su conocimiento por cuanto ese acuerdo se ofreció como prueba documental en el informe de defensa rendido por el anterior Oficial de Información.

III. Petición.

Por las razones antes expuestas y con base en los arts. 88 y 98 letra d) de la Ley de Acceso a la Información Pública:

- 1) Se tenga por recibido el presente escrito.
- 2) Se tenga por subsanadas las prevenciones realizadas por el Instituto en la resolución emitida el día 3 de abril de 2018.
- 3) Se tengan por admitidos los siguientes documentos: i) certificación del memorándum con referencia UAIP/1977/127/2018(2), de fecha 26/01/2018, suscrito por la Oficial de Información Interina del Órgano Judicial, dirigido a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; ii) acta completa de la sesión de Corte Plena celebrada el día 30/01/2018; iii) certificación del acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, específicamente en relación con el presente caso; iv) certificación del memorándum con referencia 108-2018-SP, de fecha 11 de abril de 2018; suscrito por el Sub Jefe de la Sección de Probidad de esta Corte; y v) certificación del acuerdo No. 6-P de fecha 11 de octubre de 2011, emitido por la Corte Suprema de Justicia en Pleno.
- 4) Se tenga por cumplida la resolución definitiva emitida por ese IAIP el 15 de enero del 2018.
- 5) Señalo como medio técnico para recibir notificaciones el siguiente correo electrónico: uaip.csj@gmail.com.



por Sra Marcela Escobar Perez

identifica con _____ a las: 02:55 p.m

de abril de 20 18, Junto con Escrito +

10 Folios Útils - _____



